

Crecimiento y bienestar social

Nadie discute ya que las políticas puestas en marcha tras el estallido de la crisis han sido equivocadas. Tampoco que, socialmente, la crisis ha generado un aumento de la desigualdad, la congelación y caída de los salarios, el declive de la clase media y el ensanchamiento de la pobreza.

La crudeza de la situación ha puesto en evidencia que algunas de las razones que explican lo ocurrido se remontan a los cambios experimentados a partir de la "crisis de petróleo" en la década de los años setenta. No se supo ver lo que sucedía, y ello merece una severa crítica.

En cualquier caso la política económica instrumentada desde la crisis, y que todavía se mantiene, en algunos de sus aspectos fundamentales, aunque no todos, ha demostrado su inutilidad para resolver los problemas actuales. La crítica a la austeridad y los errores cometidos en el cálculo de los multiplicadores fiscales que miden las consecuencias de los ajustes fiscales, por citar un ejemplo, son de sobra conocidos. Hoy la política y la macroeconomía no están, como debieran, al servicio del interés ciudadano.

El crecimiento infinito y sin límite no puede ser el objetivo último de una política económica progresista centrada en las personas, y que sea medioambientalmente sostenible. No se trata de eso cuando se habla de crecimiento. Sin embargo sin crecimiento sostenible, y con riesgo de caer en el estancamiento económico y en la desigualdad como ahora sucede, es imposible mantener los niveles pasados de bienestar social y seguir progresando.

Hoy sabemos también que el aumento de la desigualdad no sólo genera destructivos efectos sociales, sino que es un factor que lastra el crecimiento. Por esta razón la idea de crecimiento económico no puede separarse de la de igualdad, un principio identificable

con la izquierda. Del mismo modo, la idea de crecimiento tampoco debe separarse de la de sostenibilidad en un Planeta limitado, superpoblado y amenazado por el cambio climático. Esta segunda idea –la de sostenibilidad– todavía no ha sido plenamente asumida por la izquierda.

Para las economías desarrolladas en un mundo de recursos limitados, y sobre todo para las economías europeas centrales del área euro, el crecimiento de la productividad marca la senda de crecimiento y la capacidad de aumento de la riqueza a largo plazo. Por ello es preciso analizar, como se hace en este número, las políticas que permiten expandir esa variable, al tiempo que contribuyen a generar empleo de calidad. Otra cuestión es el crecimiento a corto plazo en economías como la española en las que existe un elevado nivel de desempleo, como consecuencia de la crisis y de los problemas y desequilibrios estructurales que se arrastran desde antes (baja cualificación, efectos de la burbuja inmobiliaria, escaso tamaño empresarial, debilidad industrial e innovadora, endeudamiento, etc.).

En España hacen falta políticas destinadas a generar renta y empleo y a incentivar inversión pública y privada, al tiempo que en toda Europa se necesitan políticas orientadas a elevar el crecimiento potencial, aumentando la productividad, mejorando la educación, aumentando la investigación, apostando por la sostenibilidad medioambiental, invirtiendo en infraestructuras, mejorando la competencia y luchando contra la desigualdad.

La izquierda española no ha sabido ganar ante la opinión pública el debate sobre la explicación de la crisis. La derecha todavía reivindica, con un

grado de éxito no desdeñable, el falso “milagro económico” de los años de la burbuja que provocaron la pérdida de un largo ciclo económico, el de 1993-2008. Un ciclo durante el que no se adoptaron las medidas necesarias, que no sólo hubieran servido para mitigar la crisis de 2008, sino para continuar creciendo y generando empleo de manera sostenible –social y medioambientalmente–. En 2016 todavía no se ha recuperado ni la renta (PIB) ni el empleo de 2007. En este contexto, en los últimos cuatro años la derecha ha impulsado un paradigma que permite reducir una parte del desempleo promoviendo la desigualdad y sin reducir la pobreza, con los llamados *trabajadores pobres*, y lo ha hecho mientras su discurso económico resiste.

En la Unión Europea se necesita un Plan de empleo europeo, lo que algunos llaman un nuevo Plan Marsall de inversiones, o pacto Keynesiano, que ponga fin al estancamiento, a la obsolescencia de la política económica y al aumento de las desigualdades sociales.

Creer sostenidamente y apostar por la reducción de la desigualdad exige: la promoción del capital humano y de la educación en todas sus variedades; el apoyo a la internacionalización y a las iniciativas de emprendimiento transformadoras y de crecimiento del tamaño empresarial –hay que superar el raquitismo actual–; respaldar el desarrollo y reformar las instituciones económicas y de gobierno para que sean inclusivas y refuercen la igualdad de oportunidades –especialmente en las grandes corporaciones–; y garantizar macroeconómicamente la estabilidad de la demanda de bienes y servicios para conjurar el riesgo de estancamiento.

El grado de desigualdad es el mejor indicador sintético disponible del bienestar social; desigualdad que es la consecuencia de las reglas de mercado condicionadas y alteradas desde hace años por los poderes económicos. ¿En qué sentido? En ámbitos como las modalidades de contratación en el mercado de trabajo, el decreciente poder de

negociación de la clase media, los cambios en la organización del mercado laboral impuestas por grandes corporaciones, la financiarización de la economía real, la obsesión por la maximización de la cotización en Bolsa y por la reducción de costes, la estructura de propiedad –en particular de la propiedad intelectual– que permite eternizar las rentas monopolísticas en algunos sectores, etc. Este ordenamiento es la causa de que cada vez haya una mayor predistribución de renta desde el mercado hacia las élites minoritarias. Todo ello exige una seria reflexión y reforma.

La caída de los salarios y el hundimiento de la calidad de vida de la clase media y trabajadora se debe también: a la pérdida de poder de negociación e influencia de los trabajadores provocada por la legislación laboral y las prácticas anti-sindicales y contra la negociación colectiva; a la reducción del salario mínimo; a la propia depauperación y pérdida de poder adquisitivo de la clase media, que ya no puede mantener los empleos de menores salarios que dependían de su capacidad de gasto y demanda; y al diseño en algunos países de las políticas de bienestar, que cuando permiten complementar infra-salarios con o ayudas anclan de facto a esos trabajadores en la pobreza, en vez de contribuir a que superen tal situación.

Hacen falta políticas destinadas a generar renta y empleo y a incentivar la inversión pública y privada. La economía española no necesita las mismas medidas que, por ejemplo, la alemana, prácticamente en pleno empleo. Sin embargo toda Europa necesita políticas destinadas a elevar el crecimiento potencial aumentando la productividad por vías como la mejora de la educación, sostener y aumentar la I+D+i, apostar por la sostenibilidad medioambiental, invertir en infraestructuras, aumentar la competencia y luchar contra la desigualdad.

En Europa este planteamiento exige un Plan de Empleo europeo, multiplicar la inversión en educación y formación para todos –jóvenes, mayores, parados–, y lo que algunos llaman un nuevo Plan Marshall o pacto keynesiano que ponga fin al

estancamiento, a la obsolescencia de la política económica y al aumento de la desigualdad.

No en vano fue Keynes quien alertó sobre la inexistencia de mecanismos de autorregulación de los mercados y sobre la necesidad de actuar para evitar la inestabilidad financiera. También, reconoció la ineludible función del Estado y de la política fiscal para generar empleo y salir de recesiones prolongadas debidas a la insuficiencia de la demanda, así como las consecuencias sobre el crecimiento de la incertidumbre y de los ajustes y obligaciones imposibles de cumplir.

desde instancias supranacionales, una dimensión que a la izquierda todavía le cuesta asumir. Europa es el campo de oportunidad –salario mínimo, renta básica, armonización fiscal, lucha contra los paraísos fiscales, I+D+i, inversión, etc.–, que debe complementarse a escala global con nuevas instituciones e instrumentos para socializar el funcionamiento de los mercados financieros y de las grandes corporaciones.

La reconstrucción de un marco económico incluyente exige profundas transformaciones, algunas de las cuales todavía no están en la hoja



La austeridad y la devaluación salarial no sólo son el camino que se necesita, sino que son la garantía del posible naufragio del euro, y con ello del proyecto europeo. Lo último que debería pasar.

La socialdemocracia tiene que asumir que las políticas de regulación de los mercados que pueden evitar el estancamiento y el aumento de la desigualdad deberán formularse en el futuro

de ruta de una socialdemocracia encerrada a la defensiva en los viejos Estados-nación. Es necesario un nuevo papel para las políticas públicas con reglas diseñadas por y para las personas, no para las élites, asumiendo que los acuerdos y pactos del siglo XX ya no valen, porque vivimos en una realidad muy distinta, que exige otras reglas.

TEMAS